

POST-SCRIPTUM

**ECUADOR: PROTESTA Y PODER ENTRE
EL SIGLO XX Y EL XXI**

REPENSANDO LA HISTORIA POLÍTICA RECIENTE

Estamos entrando en un cambio de era, se dice. La frase tiene visos de eslogan o arenga, sin embargo, ciertamente, algo inusual ocurre, pues de repente, gracias a la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la legitimidad lograda por el discurso antisistémico (plasmado, por ejemplo, en la retórica bolivariana), el Ecuador se encuentra en una encrucijada insospechada hace un año y medio, lo que indica una aceleración del tiempo político durante los últimos años. ¿Dónde buscar el origen de estas transformaciones? ¿Tuvieron necesariamente que fenecer los antiguos sujetos sociales y políticos para que brillen los nuevos portadores de la transformación? ¿Dónde germinó la corriente electoral que sustentó el triunfo de Rafael Correa, bajo la expectativa de una transformación sustancial del orden político y socio-económico?

El presente ensayo constituye una necesaria prolongación de la reflexión que inicié en el 2002 y cuyo informe concluí en el 2003, en la que puse bajo escrutinio a la protesta de la segunda mitad de los años noventa, para concluir con los levantamientos indígenas de 2000 y 2001 (el texto central). Con los años de por medio, entre la entrega del informe y su publicación, latía el peligro de presentar a la comunidad académica un texto desactualizado. Sin embargo, las demoras de la publicación de los trabajos de investigación no necesariamente ponen en riesgo la actualidad de la reflexión. Y, en el presente caso, la perspectiva histórica desde la que miramos la política de la contes-

tación ha permitido que ganemos tiempo identificando el desenlace del ciclo de protesta, con la emergencia de los sectores medios como protagonistas. ¿Representa este hecho el fin del ciclo político o el inicio de uno nuevo? Las respuestas a dicha interrogación serán producto de una reflexión del futuro, pues aún no visualizamos con claridad este elemento. Hoy por hoy podemos congratularnos de que los temas de la protesta en la historia política reciente de nuestro país, tocados en el informe central de investigación (cuya versión definitiva data de inicios de 2005), tales como la temática laboral, la cuestión de la posesión de la tierra y la producción recobren vigencia, aunque todavía de manera subterránea y poco visibilizada, junto con la insurgencia ciudadana de los últimos años por la institucionalidad estatal (esta sí, publicitada pródigamente, en cumplimiento de un nuevo orden del discurso que opera obliterando las demandas de cambio estructural de las relaciones sociales y económicas). En el presente ensayo, intentaremos realizar unas interpretaciones iniciales, justamente, sobre la emergencia del sujeto social “ciudadano” a partir de finales de 2004: los amplios sectores medios urbanos –policlasistas y poliétnicos– que están marcando la agenda pública.

Y bien, en concreto, la mirada distante nos está auxiliando en la valoración de un proceso de mediana duración de la contestación social (aproximadamente un cuarto de siglo), en los siguientes momentos:

Primero, la configuración, casi inmediata después del retorno a la llamada “democracia”, de la movilización de los trabajadores y los estudiantes durante los años ochenta, cuando el arranque de la implementación abierta del modelo neoliberal se anunciara con el gobierno de Osvaldo Hurtado.

Segundo, la expresión dubitativa en los años noventa del complejo social indígena-campesino (con la publicidad ganada por ciertos sectores indígenas con sus ambigüedades “diferencialistas”), en el contexto de presiones internas e internacionales por la aceleración del proceso de ajuste estructural, y un frágil equilibrio entre las fuerzas auspiciantes del modelo neoliberal y sus opositores. En aquel entonces, el tema de “lo campesino” se fue extinguiendo, o mejor, se lo fue desplazando del discurso público y mediático, para que en cambio madure la insurgencia social al filo del siglo XXI, con la firme alianza interétnica plasmada en el levantamiento de 2001: “Nada sólo para los indios” expresión de un liderazgo nacional de las fuerzas indígenas y campesinas en la demanda de justicia social, redistribución de la riqueza y reconocimiento cultural efectivos. Esta fase de nuestra historia contemporánea estaría, entonces marcada, por la ofensiva de los promotores del modelo neoliberal y su precoz desgaste, al calor de la vigencia del conflicto distributivo y de la contestación social, a pesar de que no siempre esta se manifiesta con claridad.

Tercero, ya en el siglo XXI, nuevos sujetos y nuevas luchas han iluminado el horizonte de la protesta. Y he aquí el caso de la lucha a muerte de los ancianos pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presagio de “lo que viene” en materia de la defensa de la dignidad ciudadana, pues fallecieron, como recordaremos, varios huelguistas; lo que, de manera contundente nos muestra la vigencia del conflicto distributivo. En lo posterior, tras la desmovilización de los llamados “movimientos sociales”, vimos la consolidación de ese popurrí de actores de las capas medias urbanas denominados “forajidos”, cuya insurgencia expresó no solamente el cuestionamiento al orden político y la exigencia de reforma del Estado, sino, en mi criterio, también la impugnación al modelo socioeconómico establecido.

Cabe recordar, entre paréntesis, que en nuestro informe de investigación habíamos analizado también lo que, aparentemente, era el ocaso de los sujetos antaño movilizados, tales como el movimiento de los trabajadores, el campesinado –con nuevos ropajes sociales– y el movimiento estudiantil. Llegamos a la conclusión de que dicha “muerte”, si bien obedecía a las dinámicas propias de inserción de dichos sujetos colectivos en un escenario en el que se les dificultaba la adaptación, fue en gran medida artificial, y se debe a una suerte de *eutanasia política*, a fuerza de una agresiva degradación simbólica. Por lo mismo, es importante decodificar el movimiento y *modus operandi* del “orden del discurso”. Sugiero que tal *modus operandi*, hoy en día, exaltaría la reforma política por sobre agudización del conflicto distributivo, promoviendo que la Constituyente se ocupe apenas de los mecanismos jurídicos de funcionamiento del Estado, y que se olvide de la reflexión sobre el modelo socioeconómico en el que deberá anclar el principio de redistribución de la riqueza.

Las últimas décadas de nuestra historia, entonces, se presentarían como una sucesión y encadenamiento de diversas actorías sociales que van tomando la posta en el plano de las respuestas al proceso de ajuste estructural y desinstitucionalización del Estado. Esperemos que, si ciertamente se trata de un cambio de era, el futuro cercano nos depare la construcción de los fundamentos de una civilización solidaria, así como la posibilidad de resignificar los mensajes y señales dados por las luchas sociales del pasado.

ANCLAJES DEL PRESENTE

El triunfo electoral de Rafael Correa en noviembre de 2006, correspondería a la culminación de un proceso de mediana duración, cuyas características y dinámica han sido ya esbozadas. Y estamos hablando de la significación general del período del llamado “retorno democrático”, pues no se trata de que las reivindicaciones hayan asumido siempre y

de manera lineal y acumulativa las impugnaciones al sistema neomercantilista y neoliberal, así como a la institucionalidad instaurada hace ya casi tres décadas. Durante este tiempo, la ficción de una convivencia democrática ha sido una cadena ininterrumpida de aprendizajes, de operaciones de descarte y de ir quemando poco a poco las expectativas mesiánicas, hasta que importantes segmentos de la colectividad han comenzado a barruntar que la construcción del “buen gobierno” y del “bien vivir” es una tarea indelegable.

Se presenta algo difusa, pero también notoria, la acción de la ciudadanía con demandas de recuperación de la esfera pública, de su transparencia y de la abolición de las inequidades mediante transformaciones institucionales y estructurales (electoralmente plasmadas en la votación ganada por Rafael Correa y León Roldós en noviembre de 2006). Pero esto ocurre solamente en una orilla, pues los populismos continúan teniendo cabida en los imaginarios políticos, y eso lo han demostrado las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias de 2006, donde ganaron presencia tanto Álvaro Noboa como el gutierrismo. En el informe de investigación habíamos observado la tendencia hacia la consolidación de una vertiente crítica de “centroizquierda” (para llamarla de alguna manera) que se habría expresado en las urnas a través de las elecciones de 2002. Dicha tendencia estaba siendo indicada por la suma de sufragios a favor de Roldós y otros candidatos de oposición. Y por qué no decir, sumando también la votación de Lucio Gutiérrez, quien saltó a la palestra electoral con promesas, luego burladas, de cambio social, económico, político y geopolítico. En el análisis de aquella época citábamos a Marco Aráuz, quien indicaba que como resultado del proceso electoral se tenía la impresión de que el Ecuador retornaba al 21 de enero de 2000, símbolo del descontento con las consecuencias extremas y fraudulentas de las políticas de ajuste; más allá, claro, de la gestión gubernamental real a la que dio paso el coronel ya en ejercicio del mandato. De tal manera que en el país estaríamos asistiendo a un proceso de polarización política, entre una vertiente populista de extrema derecha que se acoge a los beneficios de la partidocracia, y una vertiente “ciudadana”, crítica, policéntrica, resistente a los antiguos estilos políticos y sin una claridad ni consenso sobre las orientaciones a seguir en la gestión gubernamental.

En todo caso, los acontecimientos de hoy indicarían que la tendencia crítica se ha mantenido, e inclusive fortalecido en número. Empero, no podemos simplificar y esquematizar la mirada sobre la fuente del triunfo electoral de Rafael Correa, pues el torrente de votos que lo benefició tiene, en primera instancia, un componente “anti-Alvarito”, en contra de la degradada imagen del populismo plutocrático simbolizado, esta vez, por el magnate Álvaro Noboa, y luego, muy marcadamente, el

cuestionamiento de la institucionalidad caduca y corrupta a la que se le atribuyen todos los males; esquema en el que tiene muy poca cabida la perspectiva de lo social-estructural. Por lo mismo, no serían apegadas a la realidad las apreciaciones de que el sustento electoral de Rafael Correa sea “de izquierda”; o, al menos, no se trata de un desplazamiento consistente y unívoco hacia la centroizquierda. De ahí que el equilibrio, a inicios de 2007, entre la centroizquierda y los populismos de derecha es precario y reversible. Así las cosas, lo que ha ocurrido es la reconfiguración del campo político, su polarización, al margen de los partidos políticos doctrinarios de derechas, de centro y de izquierdas (Izquierda Democrática, Partido Social-Cristiano, Unión Demócrata Cristiana, Movimiento Popular Democrático, entre otros).

El triunfo de Rafael Correa es, en todo caso, un fenómeno interesante por tratarse de un triunfo emblemático, con gran densidad simbólica, ya que parece encarnar y representar a la mayoría de los sectores movilizados durante la protesta de la última década y media, así como reivindicar las demandas en contra del orden de la tercerización y la flexibilización de la fuerza laboral. Como sabemos, Correa es un personaje que emerge de los sectores medios: joven, ilustrado, actuante desde la tesis de la ética ciudadana y la renovación, cosmopolita, políticamente oriundo del fenómeno “forajido” y, al mismo tiempo, compenetrado con los sectores indígenas, hasta el punto de conocer la lengua quichua. Y, según dijo en campaña, le es también familiar la experiencia de la migración. Correa habría logrado, asimismo, lo que muchos políticos “ilustrados” serranos no consiguen: el apoyo de algunos sectores populares de la Costa, gracias a la versatilidad de su palabra y al desenfado de sus salidas de efecto, en el más puro estilo “populista”: su corta residencia en el suburbio de Guayaquil, hoy en día la firma del decreto de provincialización de la Península de Santa Elena (actualmente parte de la provincia del Guayas, tradicional enclave de una derecha poderosa y de los grandes negocios). Rafael Correa habría conquistado identificaciones electorales de amplio espectro, y ello lo convierte en un referente importante para la concreción de las alternativas políticas críticas, con potencialidades para sustentar los consensos sobre las que éstas se construyan. Se espera que el presidente y el gobierno aprovechen, para “el cambio de era”, estas circunstancias históricas, políticas y simbólicas *sui generis*, haciendo uso de la *prudencia*, exaltada por los estrategas y pensadores de la antigua Roma.

DE LA LÍNEA METÓDICA

Cuando se escribe para un público tan versado como es el que leerá estas páginas, es preciso “curarse en salud” y aclarar que no estamos planteando la realización de un *telos* histórico-político, ni mucho me-

nos, de una “caída del cielo” de un liderazgo largamente esperado, sino de la conformación de un escenario de oportunidades para los sectores que pugnan por la transformación humanista de la sociedad ecuatoriana, escenario en el que confluyen el descontento acumulado, un contexto regional favorable, y la configuración, en proceso, de un núcleo de liderazgo que, esperamos, sepa capitalizar las fortalezas coyunturales, cimentando, sobre todo, procesos de unidad política y, por otra parte, un manejo prudente de lo que hoy por hoy es, sin duda alguna, un escenario de transición.

En este *post-scriptum* nos ocuparemos –como lo anticipamos– de la protesta de los últimos dos o tres años, para completar la mirada del proceso e identificar las continuidades y las rupturas internas de la crítica social y antisistémica. Nuestro propósito central es actualizar el enfoque de la protesta, a partir del escrutinio de los procesos que acompañaron la caída de Gutiérrez, así como esbozar algunas hipótesis sobre el corolario de este período: el triunfo electoral de Alianza País con su abanderado, Rafael Correa. Se trata también de visualizar a los sujetos políticos y sociales actuantes en el período, analizar su desempeño, los contenidos y efectos de la movilización, así como la revisión de sus demandas y repertorios de acción. ¿En qué difiere la protesta del primer lustro del siglo XXI de la protesta de finales del XX? ¿Cuáles serían los impactos políticos de la movilización, sus fortalezas y debilidades?

En síntesis, argumentaremos: primero, que en el campo de la política y la crítica social se ha expresado cierta continuidad de las luchas sociales –al retomar las reivindicaciones contra el ajuste, al calor de la permanencia del conflicto distributivo– que se han ido encarnando en los diversos sujetos sociales mencionados. Segundo: a la par con este transcurso de lo social y político, hemos asistido al paulatino deterioro de la institucionalidad política y estatal inaugurada en el proceso de reforma política de finales de los años setenta; y es ahí donde se expresa la innovación de la protesta y la crítica, y lo que torna posible la mudanza de los repertorios de acción colectiva. Tercero: la presencia de nuevos sujetos sociales, “ciudadanos”, en la escena política ecuatoriana de los últimos años, junto con el declive de las expresiones partidarias “tradicionales”, se encuentra marcando la reconfiguración del campo político a partir de una acentuada polarización entre los actores de la derecha política y los sujetos críticos (¿una suerte de “nueva izquierda”?), lo que impondría nuevas tareas a los últimos. Procedamos a revisar los factores que habrían configurado el contexto desencadenante de la crisis política de 2005, así como la ulterior pujanza de las tendencias políticas críticas.

ACTUALIZACIÓN DE LA CRISIS POLÍTICA EN 2005

En enero de 2001, tras una década de movilización, el sujeto indígena creyó haber acumulado las fuerzas y el prestigio social necesario como para asumir el poder del Estado y comenzar a plasmar, por fin, la sociedad plurinacional, con respaldo de los mandos medios de las Fuerzas Armadas. El efecto real de esta movilización fue el ocaso del ciclo de movilización indígena, junto con el encumbramiento de un nuevo sujeto político: el coronel Lucio Gutiérrez, junto con una red de allegados, algunos de sus compañeros de armas y su parentela.

En noviembre de 2002, Gutiérrez asumió la presidencia de la República, con respaldo de una parte significativa del indigenado y de sectores medios, a la par que recibió el pasaporte para la conversión suya, su grupo familiar y círculo íntimo, en nuevas elites que apostarían a ser el recambio de las antiguas elites “oligárquicas”, para usufructuar de forma mafiosa de los bienes y cargos del Estado. En abril del año 2005, Gutiérrez fue depuesto, en opinión de Carlos de la Torre:

[...] sin un paquetazo económico con el que se incrementen los precios de los servicios básicos, como cuando Bucaram subió el precio del gas, de la luz y del teléfono. También, a diferencia de Mahuad, que fue tumbado luego de una crisis económica que golpeó fuertemente los bolsillos de los ciudadanos con la hiperinflación y con la crisis bancaria en la que perdieron sus ahorros, esta vez cayó un Gobierno en una coyuntura de estabilidad y de crecimiento económico (De la Torre, s/f).

Concordando con Carlos de la Torre en que el paquetazo no estaba “a la vista”, considero que la tolerancia de la ciudadanía se acaba cuando a los efectos latentes del conflicto distributivo se agrega la indignación moral con el abuso de poder expresado en la intervención en la Corte Suprema de Justicia y el ulterior regreso de Bucaram, desde Panamá. Pero volvamos a las circunstancias del manejo económico. Dado el hecho de que la economía ecuatoriana ya estaba dolarizada, y de que el momento era de crecimiento económico (nuevamente, gracias a los precios internacionales del petróleo, y las remesas de los migrantes), ¿era urgente la revisión de los precios del gas y otros combustibles, así como una devaluación monetaria, ya que el gobierno de Gutiérrez encontraba “la mesa puesta”? ¿Por qué y cómo estalló la crisis política de 2005? ¿Por qué la tozuda ciudadanía continuaba exigiendo cambios radicales?

I

Un primer elemento para comprender el estallido de la crisis sería la ya mencionada persistencia del conflicto distributivo. En tal sentido el “paquetazo” se habría dado en una forma casi invisible, sutil. Los

dos años y poco de gestión presidencial de Gutiérrez han sido vistos como un período de expansión. En efecto, entre el año 2000 y el 2004, se mantiene en alza el crecimiento del Producto Interno Bruto, que arranca con el 0,9% hasta llegar al 6,6%. Se trata, sin embargo de un crecimiento fluctuante, que obedece, por una parte, a los precios internacionales del petróleo y, por otro lado, a las remesas de los emigrantes. Es decir, la estructura misma del crecimiento presupone la paradoja de la pobreza.

De tal manera, no estaban aseguradas las condiciones para la estabilidad económica (OIT, s.f.). En lo que corresponde a la redistribución, Alberto Acosta nos recuerda la firma de la carta de intención con el FMI a los pocos días de que Gutiérrez asumiera el mando. En efecto, en el 2004 se recortó la ya magra inversión social efectiva, pues el gasto estatal en educación pasó de 638 millones de dólares norteamericanos en el 2003, a 464 millones; asimismo, la inversión en salud decayó de 323 millones, a 211 millones de dólares. Mientras tanto, el servicio de la deuda registraría un incremento del 60%, pasando de 2.370 millones en el 2003 a 3.795 millones en el 2004, elevación alimentada con los ahorros correspondientes a las pensiones jubilares (Acosta, 2005). En síntesis, ni el crecimiento era sostenido, ni los beneficios, nuevamente estaban siendo orientados a la redistribución, como tampoco a la reactivación productiva. Según datos de la OIT, sabemos que la tasa de desempleo urbana continúa siendo elevada, por el crecimiento de la Población en Edad de Trabajar. Es así que, si bien la tasa total de desempleo disminuye del 14,1% en el 2000 hasta el 11% en el 2004, la tasa de desempleo entre los jóvenes se incrementa del 17,4% al 22,1% en el 2003 y al 20,3% en el 2004 (OIT, s.f.). Las cifras dadas por la OIT no estarían reflejando, por ejemplo, los niveles de desocupación que asolarían al país, si no existiera la emigración económica. En todo caso, en la administración de Gutiérrez, el drama de la desocupación continúa acentuándose.

En otro ámbito, como es sabido, es el exilio económico de grandes contingentes de ecuatorianos y ecuatorianas lo que aplaca algunos de los efectos de la pobreza. En un estudio sobre los impactos de las remesas de los emigrantes, Acosta, López Olivares y Villamar sugieren que los montos enviados del exterior cubren y exceden en un 20% las necesidades de la canasta básica de los sectores medios empobrecidos, que son los que tendrían la posibilidad de emigrar, y con ello en el 2004 se reducirían en general los niveles de pobreza a los que existían antes de la crisis del sistema bancario de 1999-2000; sin embargo, tales remesas, siendo destinadas al consumo y no a la inversión, potencian la espiral de la inflación, lo que constituye una amenaza a la economía y al bienestar. Mientras tanto los sectores pobres propiamente dichos, amenazados por

la indigencia –y más aun los indigentes– carecen de recursos para viajar al exilio económico, y por lo tanto no logran cubrir la subsistencia. (Acosta et al., 2004). En muchos casos, si bien es posible aliviar el gasto de la canasta básica con las remesas, la educación y la salud, como hemos visto, continúan estando en una situación bastante precaria.

En tal contexto, la huelga de hambre de los jubilados por el aumento de sus míseras pensiones sería el dramático corolario de este escenario, en el que aparentemente “no ha habido paquetazo”. Por otro lado, si bien en el 2004 estuvieron activos básicamente los jubilados, la situación de la mayoría de la población se deterioraba cada vez más, por los factores que han sido mencionados, sin que se tenga clara conciencia de ello.

La explosión social se detenía seguramente por la ausencia de “paquetazo”, a consecuencia de la no eliminación de los subsidios, y la esperanza que probablemente se filtraba al calor del despliegue publicitario del gobierno sobre las entregas y donaciones realizadas a algunos sectores. Entonces, el amplio apoyo electoral conseguido por los Gutiérrez sobre todo en los campos de la serranía, en las áreas urbano-marginales y en la Amazonía en noviembre de 2006, se debería más a la gestión de la memoria, que a la atenuación misma del conflicto distributivo.

El coronel, estratégicamente, hacía entregas de herramientas e insumos agrícolas, sobre todo en las provincias centrales de la Sierra, o sea en aquellas de donde provenía la fuerza de la movilización indígena. Se trataba, claro, de la entrega de las migajas de la mesa de las elites económicas, pues, como sugiere Ana María Larrea, “la política social se redujo al reparto de dádivas y a la compra descarada de dirigentes sociales” (Larrea, 2005: 2). La deficiencia de las políticas sociales no era perceptible a simple vista, aun más, cuando la publicidad gobiernista, como se ha dicho, exacerbaba la magnitud de las dádivas.

En síntesis, en la primera década del siglo XXI, el conflicto distributivo y el acaparamiento de la riqueza social se mantienen, a pesar del mejoramiento formal de algunos indicadores. El reconocimiento de la existencia de dicho conflicto y de la inequidad social, desde el punto de vista publicitario, en general ha sido muy poco acogido por las elites gobernantes, a excepción de las circunstancias electorales, en las que prometen crear la equidad y el empleo mediante el “trabajo”, la honestidad y el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos.

II

El segundo detonante de la crisis son los efectos de la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano. Con el manejo arbitrario del nombramiento –sustitución de la “Pichi” Corte, clímax de la desinstitucionalización– quedaron transparentados, de cuerpo entero, la co-

rrupción y el autoritarismo, el desprecio del coronelato y su círculo de afines por la esfera pública. Y como si todo esto fuera poco, el representante del Estado ecuatoriano ante la República Argentina, Germánico Molina, cuota del poder ejecutivo en la Cancillería, en meses anteriores había cometido una inusual torpeza diplomática, que seguramente se originaba no solo en su carencia de formación en relaciones internacionales (y aun de cultura general), sino en las adhesiones doctrinarias de Molina. Es así como dicho personaje decide “llevar de paseo” en un vehículo oficial a Guillermo Suárez Mason, general de alto rango de la dictadura militar argentina, y acusado de múltiples asesinatos y robos de bebés, durante aquél régimen militar. Molina conocía a Suárez Mason desde hacía ya varias décadas cuando el represor se desempeñó como agregado militar en Ecuador. Con estos antecedentes, Molina retiró a Suárez, quien cumplía ochenta años, del arresto al que estaba condenado para llevarlo a festejar su aniversario. Más allá del bochorno internacional por el escándalo, se cometían ingerencias en los asuntos internos de la Argentina, lo que sumió a ambas naciones en una impasse diplomático que afortunadamente no prosperó (Gutiérrez retiró a Molina de la embajada en Buenos Aires). Es decir, a todas las malas artes del gutierrismo se sumaban el nepotismo y la impunidad.

Vale la pena analizar la atmósfera de la desinstitucionalización durante la era Gutiérrez. Fernando Bustamante sugiere que si antes de la nominación de la “Pichi” Corte (presidida por Guillermo Castro Dáger, alias “Pichi” Castro), por un amplio sector del Congreso manipulado por Gutiérrez, la población tenía aún la percepción de un Estado de Derecho mínimo, ahora esa ilusión se había desvanecido (Bustamante, 2005). En criterio de ese autor, entre noviembre de 2004 y abril de 2005 se habría consumado la aniquilación del Estado de Derecho. Es decir, siempre se vivieron violaciones a la ley emergidas de la cotidianeidad de la práctica legal, pero no obstante parecería que el Estado de Derecho hasta entonces todavía tenía una existencia tenue.

En las circunstancias de noviembre de 2004-abril de 2005, habían desaparecido tales ilusiones, ya que el Estado estaba prácticamente privatizado y manipulado por parte de los mayores partidos políticos (Bustamante, 2005). Y, añadido, en tales maniobras obtuvo su tajada también la gavilla gutierrista, que convirtió al aparato estatal en dispositivo para la legitimación y ascenso de los advenedizos de última hora, que así se convertían en las nuevas elites políticas (en el 2007, en el Congreso Nacional, el gutierrismo se ha convertido ya en la fuerza dirimente de las decisiones parlamentarias, manteniendo siempre su estilo de mayoría móvil, oscilante de acuerdo a la conveniencia y desprovista de cualesquier criterio ético). El propio gobierno gutierrista, en

su composición, mostraba profusamente su índole mafiosa; recordemos el asalto a numerosos cargos por parte de afines y consanguíneos del presidente. De tal manera que, como veremos, el gobierno como tal se constituía en un actor antiinstitucional, con sus redes de parentesco al frente de la corruptela y el saqueo de los fondos públicos.

Retomemos la reflexión de Bustamante, para dimensionar la gravedad de ese rasgo del coronelato, que a la sazón parece llegar a su clímax, lo que no quiere decir que este sería un fenómeno exclusivo del gobierno de Gutiérrez. Bustamante clasifica a los actores antiinstitucionales en dos grupos: las mafias y las corporaciones. Las mafias se encarnarían en los partidos políticos, en cuyo núcleo de poder se alojan las redes de parentesco que transforman a la organización en una empresa familiar; son los casos de las organizaciones institucionalizadas, tales como el Partido Sociedad Patriótica (PSP), el Partido Revolucionario Institucionalista Acción Nacional (PRIAN), el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y el Partido Social Cristiano (PSC), entre otros.

La ley de la mafia, de tipo patriarcal, desdibujaría la distinción entre lo público y lo privado. Las redes mafiosas serían simulacros de instituciones políticas, al ser reconocidas por el sistema poliárquico; en realidad se trata de un sistema de acumulación de adhesiones hacia la cabeza de la familia, que parasita de la economía del Estado, de donde extrae los recursos para reproducir las lealtades: “su finalidad no es la ganancia crematística exclusivamente sino el asalto de los fondos públicos justamente para obtener fondos que les permitan afianzar sus clientelas” (Bustamante, 2005: 14).

Por su lado, las corporaciones serían estructuras radicadas en la organización profesional o de interés sectorial. El derecho corporativo otorga estatus jurídico a las personas en función de su pertenencia o no al grupo, por lo que todo privilegio o prebenda deviene de la pertenencia al grupo, restringiendo el espacio ciudadano, ya que las personas se constituyen en titulares de derechos y obligaciones solamente en calidad de miembros de un grupo de estatus, nunca como personas o ciudadanos. El corporativismo acentúa la exclusión social y económica al monopolizar el acceso a dignidades y puestos de trabajo. Lo realmente grave es que en ambos casos se generaría una ficción de juridicidad (Bustamante, 2005: 14-15), lo que en gran medida se convierte en la fuente de distorsiones institucionales y de conflictos políticos, así como de la inequidad social y distributiva.

La ciudadanía, aprisionada entre las mafias y las corporaciones enquistadas en muchísimas entidades estatales y autónomas, agotaba los límites de su tolerancia; más aún cuando todo esto iba acompañado de la violencia de Estado, cuestión que tocaremos más adelante.

III

Un tercer factor para la inconformidad ciudadana fue que el gobierno de Gutiérrez se caracterizó, como pocos, por un marcado estilo de componenda política, a la que recurría para suplir la ausencia de una estructura de poder que sustentase la acción gubernamental. Y es que el presidente buscó alianzas momentáneas “con todos y cada uno de los partidos políticos”, en el contexto de la volatilidad de las coyunturas del país (Larrea, 2005: 2). Y este patrón de comportamiento político se reproduce, en el 2007, a nivel de la legislatura, convirtiendo al Partido Sociedad Patriótica en la segunda fuerza parlamentaria.

Volviendo al año 2002, recordemos la parentoria alianza de Gutiérrez con *Pachacútek*, al iniciar el mandato. Las desavenencias se iniciaron de inmediato, al clarificarse que el curso político real de Gutiérrez se había apartado del discurso de campaña. En ese momento *Pachacútek* se torna un elemento incómodo del gobierno del coronel, por lo que este procede a despedir intempestivamente a este grupo de “gente”, que lo tornaba sospechoso ante el imperio.

Por otro lado ¿cómo olvidar los alineamientos de la Sociedad Patriótica en el gobierno con el Partido Social Cristiano, hecho que develaba y enfatizaba su verdadera índole política? Sin embargo, tal concubinato tampoco fue duradero, pues Gutiérrez, comprometido solamente con las causas de su red mafiosa rompió los acuerdos, valiéndose del ajuste de cuentas, a través de la Agencia de Garantía de Depósito, a los deudores de los bancos, afectando los intereses de la familia Febres Cordero, al presionar a Agustín Febres Cordero.

Gutiérrez se aproximó también a las izquierdas en el Congreso, en aras de monopolizar los poderes del Estado y los organismos de control, en el proceso de reorganización, a su favor, de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y otras entidades.

El coronel buscó, igualmente una coalición con Álvaro Noboa, la misma que se rompió cuando el advenedizo presidente de la Corte, Castro Dáger (alias “Pichi” Castro), suspendió los juicios penales en contra de los prófugos de los noventa, Abdalá Bucaram y Alberto Dahík, así como de Gustavo Noboa. Esta situación abría las posibilidades para el retorno de Abdalá Bucaram y, con ello, la potencial amenaza de una participación en las elecciones de 2006, del ausente en Panamá, quien disputa las mismas bases sociales que el bananero. Recordemos que el fugaz retorno de Bucaram al país fue la gota que desbordó el vaso de la tolerancia de la población.

En suma, Lucio Gutiérrez supo sacar el máximo provecho de todos estos *affaires* con fuerzas de los más diversos colores políticos. Y, en el caso de las alianzas populistas, a pesar de la fractura del entendimiento con el populismo de extrema derecha de Álvaro Noboa, la

convergencia coyuntural de las tres vertientes populistas permitió que Gutiérrez, a la larga, empezara “a minar algunas de las fuentes de poder de Febres Cordero” (Larrea, 2005: 2).

Tal situación ha dado sus frutos, pues en las elecciones de 2006, el PSP, de actor electoral poco visible, pasó a ser “la segunda fuerza política de este país”, mientras el Partido Social Cristiano, junto con la Izquierda Democrática y otros sectores partidarios conformados bajo las pautas de la reforma política de 1979 saboreaban la amargura de la derrota. Es así que a finales de 2006 e inicios de 2007 tendríamos bastante claras las pistas de la articulación de un nuevo campo político.

IV

La violencia política y la inseguridad de la población también alimentaron el descontento de la ciudadanía. El gobierno emprendió acciones de inteligencia para consumir la destrucción del movimiento indígena, ahondando desde el Estado los desacuerdos entre evangélicos y católicos, entre serranos y amazónicos. El resultado final fue su desmovilización, pues “el movimiento indígena fue erosionado, fragmentado y dividido como nunca antes en su historia” (Larrea, 2005: 2). En una detallada crónica de los acontecimientos de la caída de Gutiérrez, Jairo Rolong hace un recuento de las cooptaciones a las dirigencias y organizaciones indígenas, con las que desarticularía la CONAIE. Tras la compra del ex presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, con su nombramiento como ministro de Bienestar Social, el coronel afianzaría sus relaciones con la Federación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras (FENOCIN), y la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE). Con tales respaldos y una estrategia de confrontación, Gutiérrez procedió a retirar la presencia de la CONAIE en la Dirección Nacional de Salud Indígena (DNSI), la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) y el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos (CODENPE) (Rolong, 2005: 3).

La desarticulación del movimiento indígena se concretaría no solamente con tentaciones de cooptación a dirigentes corruptibles, sino mediante la persecución política. El dirigente indígena Humberto Cholango fue víctima del asedio y la represión del gobierno, en los primeros tiempos del coronelato. Más tarde, otro dirigente indígena, Leónidas Iza, y su familia fueron chantajeadas mediante agresiones del estilo del vicariato, el hijo del dirigente fue brutalmente golpeado por supuestos desconocidos, y debió ser internado en una clínica por lesiones severas. Más de una vez la dirigencia política de oposición se vio amenazada de muerte en las carreteras del país, al ser perseguida por vehículos conducidos de manera sospechosa.

Recordemos, además, la asechanza a los/las ciudadanos/as críticos/as al gobierno, el espionaje telefónico, la zozobra permanente que recordaba los funestos tiempos del febreorderato. Además, se armaron grupos defensores del régimen, encabezados frecuentemente por personajes con antecedentes delictivos y de corrupción, frente a lo que la fuerza pública hizo la vista gorda. Es así que “la violencia política ganó terreno en el país” (Larrea, 2005: 2).

Los golpes contra las organizaciones populares, la destrucción de las instituciones, la violencia de estado, empatan con el alineamiento del coronel con la geopolítica del presidente estadounidense Bush, de quien se declaró el mejor aliado. No sorprende por ello que sus políticas interna y externa fueran congruentes con la búsqueda de firmar el Tratado de Libre Comercio, y con el involucramiento del país en el Plan Colombia. Todo esto le habría valido a Gutiérrez la protección de Bush, cuya embajadora estaría siempre presente con declaraciones públicas de respaldo a las acciones del coronel (Rolong, 2005: 1). Así, el Ecuador bajo el coronelato se alineaba plenamente en el escenario andino favorable a la estrategia norteamericana, junto con los gobiernos de Uribe en Colombia, y el entonces presidente del Perú, Alejandro Toledo.

EL ARCO IRIS DE LA MOVILIZACIÓN

En abril de 2005, la bandera arco iris de la CONAIE quedó a buen recaudo entre las cuatro paredes de la sede de la confederación, mientras los llamados “movimientos sociales” y otros sectores populares organizados se acogían a un inquietante reposo, al encontrarse debilitados.

Con todo, por los motivos ya expuestos y analizados, había una multiplicidad de personas y sectores sociales insatisfechos con la gestión de Gutiérrez. El retorno de Bucaram al amparo de las resoluciones de la “Pichi” Corte, no solamente consumaba la caída del Estado de Derecho, sino que también sobrepasaba los límites de lo moralmente tolerable, desde la perspectiva de amplios sectores medios urbanos, cuyo protagonismo y movilización contribuyó decididamente a la expulsión de Gutiérrez. ¿Cuánto tiempo los sectores medio-altos urbanos habrán de marcar el carácter de la política nacional, y bajo qué expresiones?

Los sujetos de la movilización de abril de 2005, de extracción social múltiple, plantearon, en síntesis, cinco puntos, sobre los que ya se había insistido en circunstancias anteriores, tales como: el anticipo de las elecciones presidenciales, la creación de una Asamblea Constituyente, el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC), el no involucramiento del país en el Plan Colombia y la finalización de de los convenios militares con los Estados Unidos, entre ellos, el de la Base de Manta (Luna, 2005).

El señalamiento de la importancia de la protesta de los sectores medios, en la coyuntura de la caída de Gutiérrez, no debe llevarnos al

equivoco de que ellos, al marcar el momento culminante del descontento, hayan sido los gestores exclusivos del cambio, pues ya hemos visto que el conflicto distributivo se expresó con todo dramatismo en los reclamos de los ancianos pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que ya a partir del 15 de abril de 2005, los sectores barriales del sur de Quito se involucraron, otorgando consistencia y envergadura a la protesta forajida.

La intensidad de los reclamos contra la corrupción, el nepotismo y la arbitrariedad recordaban en algo al escenario político de la caída de Abdalá Bucaram. Los sectores medios-altos e ilustrados continuaban movilizándose, mientras, ya en abril, Bucaram llegaba de Panamá, como otras veces, entre el júbilo de sus seguidores y la indignación de una gran cantidad de la población urbana serrana, sobre todo capitalina, para quienes, entre Gutiérrez y Abdalá, el fantasma del populachismo redoblabla su amenaza.

Revisemos, ahora, la cronología de la movilización y la secuencia de los hitos más importantes de la respuesta a la crisis política de 2005.

Uno de los hitos fundamentales del mes de enero fue la llamada “Marcha Blanca”, movilización convocada por el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en demanda del presupuesto estatal comprometido para la ciudad porteña. A continuación, en el mes de febrero de 2005, siguieron las marchas de Quito y Cuenca, ambas lideradas por los alcaldes, miembros del partido Izquierda Democrática. La de Quito (a la que se sumó el movimiento *Pachacútek*) se caracterizó por levantar el lema de la defensa de la democracia. Según Rolong, las exigencias no se limitaron a la reivindicación del retorno de la Corte defenestrada, sino que se ampliaron al clamor de “¡Que se vayan todos!”. Mientras tanto, en la marcha de Cuenca brillaron consignas tanto de reivindicación provincial, como en defensa de la democracia, así como en contra del TLC. En todo caso, a diferencia de la “Marcha Blanca” de Guayaquil, en Quito y Cuenca la participación y las demandas habrían rebasado el mandato por la vuelta de la institucionalidad jurídica.

Un intento de movilización se realizó en abril desde la prefectura de Pichincha, bajo el liderazgo del socialdemócrata Ramiro González; sin embargo, el 12 de abril, día designado para la paralización provincial, todo en Quito funcionaba normalmente: el transporte, los negocios, las oficinas. Solamente pequeños grupos de ciudadanos/as de extracción social medio-alta interrumpían el tráfico vehicular en algunos sitios. Todo indicaba que la población había desoído la exhortación de uno de los partidos que había liderado la política provincial y nacional durante las dos últimas décadas. El sociólogo Mario Unda interpreta este hecho como el fracaso de las intermediaciones de los partidos políticos y de las instituciones locales (Unda Soriano, 2005: 4).

Por la noche, en cambio, comenzó a prosperar la autoconvocatoria de los sectores medios urbanos, por vía de mensajes de celular y correo electrónico, dando inicio a las movilizaciones masivas. Para comenzar, unas cinco mil personas se concentraron en la avenida de los Shyris, en el norte de la capital. Desde el 14 de abril crecía ya la efervescencia nocturna. El coronel Gutiérrez denominó “forajidos” a un nutrido grupo de manifestantes que se congregaron frente a la residencia presidencial. Y de esa manera, en el término “forajidos”, resignificado como rebeldía ante la “dictocracia”, se cimentó la identidad de la protesta abrileña.

El 15 de abril fue decretado el estado de emergencia, hecho que caldeó los ánimos de la población quiteña, a partir del cual crecen las concentraciones nocturnas. La movilización se extendía también a los barrios del sur, donde prima la población de extracción popular. Ante la presión de las manifestaciones, Gutiérrez se vio obligado a cesar a la “Pichi” Corte que él mismo había encumbrado manipulando medidas dictatoriales.

Mención especial merece el papel que jugó en las protestas de abril, el llamamiento de Radio La Luna, emisora caracterizada por su postura crítica contra el establishment político y los gobiernos neoliberales. Sus exhortaciones contribuyeron de manera decisiva para que el ambiente cuestionador se profundizara, al punto de que “ya la noche del domingo 17, el lunes 18 y el martes 19 de abril estaban las calles de Quito con un ambiente generalizado de descontento popular contra el gobierno de Gutiérrez. A toda hora había concentraciones, asambleas, reuniones y diversas actividades que se orientaban desde Radio La Luna, como frenazos, pitazos, globazos, cacerolazos, etc., que cobraban fuerza en la noche con movilizaciones hacia el centro histórico” (Rolong, 2005: 5).

En adelante, proliferaron las expresiones de la protesta y se desplegó una inusitada gama de acciones pacíficas: desde los cacerolazos sugeridos por las amas de casa y los globazos, armas bélicas de las familias, hasta los tablazos, los rollazos (rollos de papel higiénico lanzados al aire) pasando por los mochilazos de los estudiantes. Todas estas expresiones merecieron la atención del gobierno, es decir lograron aquellos niveles de eficacia política que no habían conseguido las “marchas” organizadas por el establishment, ni los pitazos y plantones organizados por Participación Ciudadana.

Cabe destacar, asimismo, que Quito no durmió (casi literalmente) porque los y las reclamantes aparecían en horas de la noche, manteniendo pendiente de la pantalla de TV a todo el país. Las protestas nocturnas mantuvieron en vilo al Gobierno, al Congreso y a los partidos políticos. El 21 de abril, las Fuerzas Armadas retiraron el apo-

yo a Gutiérrez; pasado el medio día el coronel y sus allegados huían en helicóptero de la terraza del Palacio de Carondelet, mientras en el Congreso se tomaba juramento a Alfredo Palacio, hasta entonces vicepresidente del Ecuador.

ENSAYANDO INTERPRETACIONES

Ha llegado el momento de arriesgar elucidaciones e hipótesis, en torno a lo que Charles Tilly ha denominado “repertorios de acción colectiva” y sus connotaciones, en el contexto de la movilización de abril de 2005. Siguiendo a Tilly, Javier Auyero denomina como tales a los modelos de movilización, los que se configurarían por un “conjunto de rutinas aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado”. Dichas rutinas no derivarían de una filosofía, sino que surgirían en la lucha, en las interacciones entre los ciudadanos y el estado. El examen de los “repertorios” involucraría diversos niveles de análisis, que van desde los cambios de magnitud macro, tales, como la (des)proletarización o los procesos de formación del Estado, hasta la interacciones del estado con los sectores movilizados (Auyero, 2002).

Lo fundamental, a mi juicio, es el hecho de que el cambio de repertorio, según Tilly, indicaría la presencia de cambios políticos significativos. Intentando probar esta explicación para el caso ecuatoriano, mencionaríamos el cambio de lo que fue la forma “huelga nacional” del Frente de Trabajadores vigente entre los años setenta y ochenta, a la forma “levantamiento” característica del movimiento indígena de la década de los noventa, como transformación del modelo desarrollista con Estado interventor, al modelo neoliberal, con el Estado que cumpliría funciones de gestión. El cambio de “repertorio” operado inicialmente en las movilizaciones contra Bucaram (movilización de los sectores altos y medios) y en las protestas contra el coronelato sería indicador, en esta lógica, de algo bastante sustancial que está aconteciendo en el seno de la sociedad ecuatoriana, tras el ocaso por “inanición” y por “eutanasia” del movimiento indígena. ¿Qué es aquello, y cuál es su significación histórica?

Quizá dicho cambio responda a la extenuación de la institucionalidad estatal inaugurada en 1979 como brújula de la vida política, lo que daría preeminencia a la sociedad civil como orientadora de los cambios en el modelo político y económico. No hace falta redundar ya en los sujetos protagonistas de conflicto desatado en la primera mitad de 2005, y sí recalcar en las formas eminentemente pacíficas, amigables y creativas asumidas por los protestantes de inicios de la época (la violencia se desencadenó solo al momento que los francotiradores gutierristas atacaron a los manifestantes). Eran también llamativos los

horarios de la protesta, esto es, después del trabajo y no en horas laborales como antaño. Un rasgo esencial del presente repertorio sería, sin embargo, algo que podríamos llamar la “espontaneidad” de la acción, y la policromía social de los participantes. Ahora bien, ¿se trataría, realmente, espontaneidad “ingenua”? Me inclino a pensar más bien que se trataría de una acción policéntrica marcada por la reticencia a los protagonismos individuales, a la generación de una cierta elite (con lo que de paso quiero decir que es preciso distinguir entre los participantes del movimiento forajido y de los sectores incentivados por Participación Ciudadana, es decir “de la sociedad civil de arriba”). La demanda latente en estas formas de participación radicaría, entonces, en el cambio de carácter del liderazgo político y de las reglas del juego institucional, de la economía y de las relaciones internacionales.

Del rechazo a los liderazgos políticos de viejo cuño se derivaría que el agotamiento de la ciudadanía se habría traducido en un “fuerte cuestionamiento a las representaciones” (Unda Soriano, 2005: 5). Se trataría, pues, del rechazo al centralismo, a la concentración del poder político y económico y como acertadamente menciona Unda, de la búsqueda de autorrepresentación. Este autor adelanta que el rechazo no se habría limitado a la imagen y gestión del presidente de la República, sino que en lo posterior se habría extendido también hacia “los representantes recién elegidos o reelegidos apenas en octubre, alcalde, prefecto concejales[...] todos perdieron legitimidad” (Unda Soriano, 2005). La expresión más clara de la quiebra de las instituciones, del modelo económico-social y de la representación política sería el clamor por la Asamblea Constituyente, que si bien comienza a concretarse en el 2007, con el gobierno de Rafael Correa, venía madurando desde hace tiempo atrás en las continuas impugnaciones de los movimientos sociales contra los congresistas en el 2001, bandera que luego fue recogida por las fuerzas ciudadanas.

En nuestra interpretación, “lo ciudadano” manifestado en abril no cabe ser restringido a la demanda del retorno del Estado de Derecho o en contra de la corrupción. Considero que cabría más bien pensar en una apuesta colectiva a cambiar el carácter y perfiles de lo que llamamos “Estado de Derecho”, es decir, en la apuesta a la modificación misma de los pilares del contrato social, en su modalidad inaugurada a fines de los años setenta. No se trataba, desde luego, de “hacer la revolución”, en el sentido de las décadas anteriores, sino más bien de modificar de raíz las reglas del juego de la convivencia pública. En todo caso, la conjunción del desmoronamiento del Estado de Derecho con la concentración de la riqueza y los recursos, la privatización del Estado, la plutocracia y la oligarquización de la sociedad que se agudiza desde los años noventa, impulsarían, en primera instancia, a asumir a la ética

como fundamento de toda política. Pues, para dar curso a las transformaciones sistémicas, es preciso inicialmente recuperar la confianza en los actores políticos. Una gran parcela de la población, desde el bastión de lo cotidiano, se ha “blindado” en contra de “la política”, y podremos ver el cambio solamente en la medida en que las propuestas sociales y políticas vuelvan a ser creíbles.

En una última línea interpretativa nos referiremos al carácter mismo de la movilización del año 2005, pues existen puntos de vista escépticos acerca del problema. Por ejemplo, según Rodríguez y Solís (2005), un papel crucial en la Marcha Blanca y la Marcha Ciudadana de la Asamblea de Quito lo habrían tenido los financiamientos realizados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de la Corporación “Participación Ciudadana”. Tampoco ha faltado la mirada de la sospecha, la misma que ha sido plasmada en el análisis de Guido Proaño, autor que sostiene que el movimiento forajido “más que un movimiento en el sentido marxista de la palabra, fue una eclosión social. Se incubó al calor de los fallidos esfuerzos realizados por la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano para llevar la oposición parlamentaria a la acción callejera con participación de las masas, de allí su matriz política –no reconocida por supuesto– y su composición social pequeñoburguesa media y alta que se sentía resentida por tener como presidente a un indio, a un “yumbo” (como coreaban en las calles) y que encontró el momento para la revancha social” (Proaño, 2005: 2).

Así, pues, las acciones de protesta de abril de 2005 eventualmente estuvieron teñidas por el racismo y el regionalismo. En Quito, por ejemplo, se consideró un agravio la entrada de huestes gobiernistas de otras ciudades (costeñas, en particular) para contrarrestar la movilización ciudadana. Es en ese sentido importante reconocer que parte del ímpetu antigutierrista se debió al origen geográfico del presidente, así como a su ascendencia “chola”. En Guayaquil, como veíamos, el tenor de la movilización llegó a tener fuertes tintes regionalistas, incluida la expectativa autónomo-separatista.

Es preciso reconocer el carácter regionalista y de clase, y aun el financiamiento por parte de la USAID a Participación Ciudadana. Pero este reconocimiento no puede llevarnos a aceptar los enfoques simplificadores y reduccionistas. Pues dichas evaluaciones estarían, en nuestra opinión, orientadas por criterios revolucionario-maximalistas, lo que las llevaría a descartar la validez de la contestación abrileña como hito importante de la protesta en contra de la profunda degeneración del orden socioeconómico y político institucional. ¿Podemos obviar el hecho de que las presencias y reivindicaciones levantadas en la marcha de Quito –como en la de Cuenca– hayan rebasado los cauces políticos y

discursivos que se les habría pretendido imponer a través de dichos financiamientos? Solamente la mirada de conjunto al período nos revela que, en su transcurso, nuevamente se expresaron las tensiones acumuladas durante las últimas décadas con el orden de cosas, en general, y en concreto, con el modelo excluyente en lo social y concentrador de la riqueza y el poder político.

A MODO DE CONCLUSIONES: LA RECONFIGURACIÓN DEL CAMPO POLÍTICO

Primero. Insisto en que la crisis política que vive el país en los últimos años tiene sus orígenes tanto en la permanencia del conflicto distributivo, como en la privatización del Estado, aun cuando eventualmente el primero resulta disimulado gracias a las remesas de los emigrantes, mientras la segunda se iba configurando dramáticamente en el fenómeno de la desinstitucionalización, la partidocracia y el quebranto del estado de derecho. Lo que quiero decir es que los matices “institucionalistas” de los que se tiñó la protesta de abril no significan que haya perdido vigencia la demanda por la redistribución, pues, como hemos esbozado, el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos no tuvo un impacto, ni siquiera paliativo, en la precarización de la oferta de empleo, ni en las inversiones estatales en salud y educación.

Segundo. Si en los años noventa, en el campo de fuerzas políticas se configuraba una suerte de “empate” entre las corrientes auspiciantes de las transformaciones neoliberales y las que las han impugnado, después del paso por el gobierno de Sociedad Patriótica tal equilibrio colapsó a merced no solamente de las dinámicas internas de las organizaciones campesino-indígenas, sino también de lo que hemos llamado su *eutanasia política*, en el contexto de la intervención corruptora del gutierrismo contra las organizaciones populares. Es decir, hacia el 2003 el Estado había dejado de ser el campo de negociación de los sectores populares para la manutención de ciertas condiciones básicas para la defensa de los derechos sociales.

Tercero. El proceso electoral cumplido en la segunda mitad de 2006 ha mostrado uno de los corolarios del proceso de la mediana duración: la consolidación y fortalecimiento de una nueva derecha populista, encarnada en el PRIAN y en el PSP, que toma la posta a la derecha “doctrinaria” –Partido Social Cristiano y Unión Demócrata Cristiana– visiblemente debilitadas. Por otro lado, asistimos también al eclipse de las organizaciones sociales de corte gremial y corporativo, mientras se da el despliegue de organizaciones “ciudadanas”. De hecho, un conglomerado de ellas, Alianza País junto con otras organizaciones del mismo tipo, sostiene el triunfo presidencial de Rafael Correa Delgado. En general, asistimos a la proliferación de agrupaciones ciudadanas de pequeña

y mediana envergadura, muchas de ellas “antioligárquicas”, frecuentemente desconocidas y/o poco expuestas a la difusión mediática.

Cuarto. Un rasgo fundamental del nuevo campo político es el retroceso relativo de las reivindicaciones sobre la diferencia. Esta tendencia se tornó palpable ya en el 2000-2001, bajo el eslogan “Nada sólo para los indios”, expresión de demandas de redistribución de la riqueza, junto con el reconocimiento y el diálogo interétnico. En aquel entonces comenzaba a esbozarse la inconformidad con el deterioro de las instituciones del Estado. Aproximadamente un lustro después, cobra fuerza la exigencia de un nuevo orden institucional, que se convierte en el pivote de la lucha política, manteniéndose vigente la demanda distributiva, hecho que se reflejó también en las agendas electorales de 2006.

Quinto. En lo que llevamos del siglo XXI el campo de pugna se ha trasladado de los patios interiores del sistema político, a su antesala “ciudadana”, en virtud de la decadencia del segmento partidario y de la pérdida de legitimidad de la política, tal como esta se había venido poniendo en práctica desde el llamado “retorno democrático”. Es así que el “mundo de la vida” ha resultado politizado, gracias a la entrada sin mediaciones orgánico-partidistas de un gran contingente “ciudadano”. Se trata, precisamente, del fenómeno “forajido”, del cual aún no hemos logrado la distancia necesaria como para apreciarlo en todas sus implicaciones político-sociológicas. En todo caso, frente a las evaluaciones que simplifican y caricaturizan dicho fenómeno, planteamos que hoy en día son necesarios otros parámetros y lenguajes para su aprehensión. Enfáticamente propongo que la politización del mundo de la vida podría promover un acercamiento entre la actividad pública y las exigencias reales de la población, acortaría la distancia entre los políticos y la enorme gama de ciudadanos/as “de a pie”, siempre y cuando aquellos logren tomar el pulso de las transformaciones anheladas: transparentar las acciones en la esfera pública, recuperar el sentido de “lo público” en tanto lo común a todos y todas (más allá de las especificidades sociales y culturales) y trabajar a favor de la ciudadanía impulsando la redistribución substantiva de la riqueza.

Cuenca, 28 de febrero de 2007